



Íconos. Revista de Ciencias Sociales
ISSN: 1390-1249
revistaiconos@flacso.org.ec
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales
Ecuador

Hernández E., Virgilio
Gutiérrez: el signo de la frustración
Íconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 18, enero, 2004, pp. 10-17
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Quito, Ecuador

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50901802>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Gutiérrez: el signo de la frustración

Virgilio Hernández E.¹

Breve recuento sobre la alianza

El 6 de agosto de 2003 el Secretario de Comunicación del Gobierno, por un lado, y la máxima dirigencia del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País, por otro, anunciaban la ruptura de la alianza y el fin de la participación de los miembros de Pachakutik en el Gobierno. El episodio final mantuvo la tensión que caracterizó la alianza desde su misma génesis. La ruptura se convertiría en el desenlace de un proceso que siempre tuvo dificultades, incluso para el propio acuerdo electoral.

El Movimiento Pachakutik, luego de un proceso de consulta en las organizaciones y provincias, resolvió impulsar la candidatura del Economista Auki Tituaña; al mismo tiempo, fijó como objetivos de la participación electoral desarrollar un gran frente que permitiera la construcción de una alternativa frente a la derecha y el populismo; fortalecer la presencia del Movimiento en los espacios institucionales, esto es, un bloque significativo de diputados, consejeros provinciales y concejales

cantonales. De la misma manera, se planteó ampliar la presencia del movimiento a las 22 provincias y desencadenar un proceso participativo de Plan de Gobierno Democrático de Salvación Nacional. La decisión de Antonio Vargas de presentar su candidatura presidencial en las elecciones del 2002 con el Movimiento Amauta Jatari motivó, a su vez, la resolución de la CONAIE de no auspiciar ninguna candidatura indígena y obligó al Movimiento Pachakutik a buscar una alianza en condiciones de desventaja, puesto que se habían disminuido potencialmente sus posibilidades de participación con candidato propio.

El Movimiento Pachakutik desplegó esfuerzos para constituir la unidad de las fuerzas de centro izquierda. Lamentablemente, la posición hegemónica del expresidente Borja y la falta de una definición oportuna y coherente del abogado León Roldós limitaron el espectro de alianzas a la relación con el coronel Lucio Gutiérrez y el Partido Sociedad Patriótica. Por su parte, para Sociedad Patriótica la alianza significaba recomponer las fuerzas fundamentales del 21 de enero y canalizar hacia su candidatura presidencial el acumulado simbólico y electoral del Movimiento.

Aunque los ejes centrales de la alianza constituía una posición crítica frente al neoliberalismo, la corrupción, el sistema político y la injusticia social, jamás se logró plasmar un verdadero plan de gobierno del conjunto de sectores que impulsaban la candidatura. El 20 de octubre del 2002, la alianza 3-18, encabezada por el binomio Gutiérrez-Palacios, obtu-

Hernández, Virgilio, 2004, "Gutiérrez: el signo de la frustración", en *ÍCONOS* No. 18, Flacso-Ecuador, Quito, pp. 10-17.

1 Profesor del Departamento de Sociología de la PUCE. Ex – Subsecretario de Gobierno y dirigente de Pachakutik.

vo 943.123 votos, logrando una diferencia de 148.509 votos sobre su inmediato seguidor, 237.530 votos sobre el tercero y 304.530 votos por encima del candidato de la ID, de tal forma que la votación histórica obtenida por el Movimiento Pachakutik resultó vital para el triunfo en la primera vuelta y de la propia elección presidencial, por la debilidad de la candidatura de Alvaro Noboa en segunda vuelta. Además, Pachakutik había logrado captar 11 diputaciones.

El 25 de octubre de 2003, ante el Consejo Político Nacional del MUPP-NP, Lucio Gutiérrez ratificó su compromiso a través de la firma de un documento que entre otras cosas establece la ratificación de la alianza para “ejercer un gobierno democrático, en base a políticas económicas y sociales que fundamenten los cimientos de un nuevo modelo de desarrollo nacional socialmente justo y sustentable”. Dicho programa debía ser el eje que permita un “acuerdo democrático, la unidad y el desarrollo nacional basado en el fortalecimiento de la producción, la generación de empleo, el incentivo a las exportaciones y a la competitividad del país a través de una política monetaria que favorezca el crecimiento económico y la distribución equitativa de la riqueza”.

Además, en el mencionado acuerdo se establecía explícitamente la aplicación de una política soberana de comercio y relaciones internacionales, así como la fijación de mecanismos conjuntos para la adopción de políticas públicas e incluso para la designación “de los hombres y mujeres más idóneos para la conformación del equipo de gobierno y los colaboradores(as) en las diferentes instituciones y funciones del Estado”². El 24 de noviembre se confirmó en las urnas lo que todas las simulaciones habían señalado: triunfó el candidato de la alianza 3-18 con un total de 2.803.243 votos.

Luego del triunfo se profundizaron algunos de los problemas que empezaron a evidenciarse en la segunda vuelta, mientras también se hacía más notorio el acercamiento del Presidente electo a grupos financieros de la Costa y los contactos con la embajada norteamericana se volvían continuos. En Pachakutik se coincidía con la necesidad de conformar un gobierno amplio, pero se insistía en la necesidad de establecer ejes que den direccionalidad al conjunto del gobierno. Se abría, desde la perspectiva del MUPP-NP, un reto histórico y un gobierno en disputa. Esta posibilidad es la que precisamente se cerró con el acuerdo PSP-PSC, nueve meses después de iniciada la gestión.

Reflexiones sobre un gobierno de alianza

El régimen presidencialista desincentiva la construcción de alianzas o, más bien, las limi-



ta casi con exclusividad al momento electoral (cuando las tareas de gobierno hacen deseables, incluso necesarias, a las alianzas). La experiencia en nuestro país lo confirma: es posible gobernar prescindiendo de alianzas e inclusive sin una mayoría legislativa. Las reformas políticas que han acompañado los procesos de ajuste en el continente han buscado concentrar cada vez más poder en el ejecutivo, de tal forma que éste es un legislador privilegiado al disponer de capacidad para presentar leyes y, sobre todo, para vetar las propuestas que surgen del Congreso de forma total o parcial. Esto se evidencia en el hecho

2 Para mayor profundización sobre el balance puede mirarse la Revista El Churo, publicación oficial del MUPP-NP, N° 6, de septiembre del 2003 o la página web: www.pachakutik.org.ec

El régimen presidencialista desincentiva la construcción de alianzas o, más bien, las limita casi con exclusividad a las elecciones. La experiencia reciente lo confirma. Un error de Pachakutik y otros aliados fue entrar en el regateo burocrático y abandonar la disputa general del sentido y la direccionalidad del gobierno.



que desde el retorno democrático todas las alianzas o coaliciones que han logrado la Presidencia de la República no se han mantenido coaligados durante la gestión de gobierno y en varios casos la ruptura de la alianza ha sido motivo de conflicto e inestabilidad política. Lo señalado nos permite concluir que en el régimen

presidencial la posibilidad, cohesión y mantenimiento de una alianza de gobierno estará determinada por la perspectiva y voluntad del Presidente de la República, y ni siquiera, en estricto sentido, del partido al que se pertenezca.

En la primera vuelta, y una vez que fracasaron los intentos de unidad de la centroizquierda e izquierda política, la alianza Sociedad Patriótica-Pachakutik, con el apoyo del MPD y

un sin número de organizaciones sociales de toda índole, aparecía en el espectro político como la “candidatura de la ruptura” con el sistema político imperante, el modelo de desarrollo y el sometimiento del país a los organismos multilaterales. A pesar de la falta de claridad conceptual del candidato presidencial, la propuesta del binomio Gutiérrez-Palacio recogía las tesis esgrimidas en los últimos años por los movimientos sociales y la izquierda ecuatoriana. En la segunda vuelta el abanico de apoyo se amplió; el discurso público se tornó más ambiguo e impreciso. Al interior de la alianza existía la comprensión suficiente de la crisis y sus responsables, pero asimismo se insistía en la necesidad de conformar un frente sólido que permita mantener la perspectiva de cambio del gobierno, sin descuidar la construcción

de una plataforma amplia política y social que ayude precisamente a sostener los cambios propuestos, incluso soportar un posible asedio de los sectores oligárquicos resistentes a las transformaciones planteadas.

Una vez electo, “la grandeza del poder” paulatinamente fue obnubilando la limitada comprensión existente. Creció la influencia del círculo familiar y de militares cercanos a los cuáles se les encargó áreas vitales de la economía como la organización de Petroecuador, el Fondo de Solidaridad, las aduanas y otras instancias del Estado. Las discusiones programáticas y de discusión de las acciones del gobierno fueron reemplazadas por largas y tediosas jornadas de negociación de la participación de los aliados en los espacios públicos.

El Coronel Gutiérrez no pudo entender que tenía la posibilidad de liderar una alianza *sui generis*, que requería de un liderazgo basado no sólo en la legitimidad del triunfo electoral sino en la capacidad de orientar al conjunto de fuerzas hacia los objetivos de reactivación productiva, lucha contra la corrupción, reforma política y de justicia y equidad social, que requería establecer ejes direccionadores del conjunto de la acción del gobierno, superando el enfoque del “cuoteo burocrático”, un liderazgo que pueda sintetizar las urgencias de las políticas económicas con las necesidades y expectativas sociales, que sea capaz de transmitir la voluntad de afectar, no como siempre, a los sectores más vulnerables de la sociedad sino también a quienes se han beneficiado de la crisis.

La conformación del primer gabinete es una expresión, de alguna manera, de la diversidad, pero también de la potencialidad que existía en el gobierno de propiciar un frente de convergencia. Lamentablemente faltó liderazgo y perspectiva para que este espacio se convierta en una instancia de asesoramiento, discusión y planteamiento de políticas globales. Paulatinamente, la “coherencia del equipo económico” determinaba al frente político y los ministerios del área social subordinados a constituirse en el mecanismo de acumulación y construcción de “base propia del régi-

men”, pero limitados a las prioridades y disposiciones del Ministerio de Economía.

De ninguna manera se buscaba condicionar la potestad propia del Presidente de la República para asumir decisiones, sino más bien buscar que estas puedan tener un proceso previo deliberativo entre las fuerzas de la alianza y con los sectores más representativos de la sociedad, de tal forma que sean relegitimadas. Paradójicamente, esto implicaba decisión, puesto que no se pensaba en una “no política” de un falso e imposible consenso que busque satisfacer a todos los sectores, sino más bien en el fortalecimiento de la plataforma democrática que permita espacio para aplicar el programa propuesto.

Un error del Movimiento Pachakutik y de otros sectores que participaban en la alianza fue haber entrado en el regateo burocrático y abandonar la disputa general del sentido y la direccionalidad del gobierno, articulando y potenciando los mecanismos de contraloría y fiscalización social, algunos de los cuáles empezaron a construirse en el proceso de las mesas programáticas que se desarrollaron previo a la segunda vuelta electoral. El Presidente confundió ejercicio de autoridad con liderazgo, lo cual sumado a las rigideces del régimen presidencial terminaron por desarticular una oportunidad histórica, por lo menos, desde el retorno democrático.

El dilema de con quién gobernar

Hay varios dilemas que han caracterizado el actual gobierno. Uno de ellos es la indistinción permanente entre jefe de Estado y líder de un partido que, según sus aspiraciones, va a “gobernar los próximos veinte años”. Si a este elemento sumamos la falta de definiciones políticas de Sociedad Patriótica, entenderemos algunas de las decisiones y de las opciones políticas por las que se ha inclinado el Presidente Gutiérrez.

Una vez concluida la primera vuelta, con todas las simulaciones a favor y conocidos los resultados provinciales, era absolutamente

claro que el próximo gobierno requeriría de alianzas parlamentarias que pudiesen ser un soporte a la acción del ejecutivo, más aún cuando existen disposiciones constitucionales que condicionan la presidencia del Congreso para el partido que mayor votación obtenga y la vicepresidencia para la segunda fuerza, en este caso para el Partido Social Cristiano y para la Izquierda Democrática, respectivamente. En consideración de dicho marco, la estrategia planteada consistía en lograr una alianza programática con los sectores más afines sobre la base de una agenda legislativa que contemple la discusión de varias leyes, escapando de la “trampa institucional” que le ha permitido al PSC mantener secuestrados a los diferentes gobiernos mediante el comando del propio Congreso Nacional, de sus comisiones, de las Cortes de Justicia, de los Tribunales electorales y de control constitucional, así como de los organismos de control y otras autoridades que le corresponde nombrar al legislativo o a su vez proponer ternas para que el Presidente de la República los designe.

Lucio Gutiérrez no pasaba por alto la falta de apoyo en la segunda vuelta del ex presidente Rodrigo Borja, pero al mismo tiempo creía que un objetivo de la acción de gobierno consistía en debilitar a la Izquierda Democrática, puesto que -según decía- era un competidor en la Sierra por el mismo electorado. En la lógica del Presidente era más probable un acuerdo con el roldosismo o el propio PSC, antes que alguna coincidencia programática debido a un elemental reparto del electorado. Una vez más la falta de consistencia de la llamada “centro izquierda” se hizo presente. El 5 de enero el gobierno perdió la posibilidad de incidir en una mayoría legislativa y la ID le entregó nuevamente el control del aparato institucional al PSC, para que sea el dirimente en la nominación de las autoridades nombradas por el Congreso, influya en las Cortes de Justicia, obtenga la Presidencia y Vicepresidencia del Tribunal Constitucional y bloquee la nominación tanto del Contralor General de la Nación así como del Defensor del Pueblo (dicho sea de paso, los ac-

tuales subrogantes son vinculados al PSC).

Esta falta de claridad entre su papel como Presidente y como líder de un partido (familia) se ha mantenido a lo largo de la acción de gobierno. Esto explica su renuencia a lograr acuerdos con el legislativo presidido por Guillermo Landázuri. Sólo la inminencia de una profunda crisis política, precipitada antes que por los posibles vínculos de su cuñado con personas vinculadas al narcotráfico, por la torpeza y falta de manejo político, han obligado a que el Presidente de la República, después de una larga reunión con los mandos militares, decida la separación del Director de Sociedad Patriótica, mientras insiste en un acuerdo desesperado con el PSC y el PRIAN.

Una vez perdida la mayoría legislativa en la sesión del 5 de enero del 2003 se acentuaron las diferentes perspectivas políticas e ideológicas del frente político. Mientras desde el Ministerio de Gobierno se buscaba acuerdos legislativos basados en una agenda política y un acuerdo legislativo-ejecutivo, el círculo cercano al Presidente insistía en la conformación de un bloque de mayoría recurriendo a viejos mecanismos de la política ecuatoriana: el propio hermano y diputado por la provincia de Napo se “atrincheró” en un pequeño hotel de Quito para organizar PETROECUADOR y negociar, al mismo tiempo, con el asesoramiento de un “corredor de voluntades” el apoyo de legisladores de diferentes bancadas a cambio de prebendas y cargos públicos. El mismo diputado, que luego de la negativa del frente político a continuar con una estrategia de resquebrajamiento de los bloques legislativos, preparó los acercamientos con el ingeniero Febres Cordero y posteriormente la subordinación del régimen en este camino sin regreso en el que el PSC lo acompañará hasta el minuto exacto en que pueda seguir cogobernando sin asumir responsabilidad alguna.

Las tácticas militares como estrategia de gobierno

Lucio Gutiérrez es ante todo un militar y este “ser” ha condicionado de una manera de-

terminante su gobierno. Sin pretender reducir la política a la acción individual, creo necesario revisar algunos de los supuestos que han permitido la organización y desenvolvimiento del gobierno del Coronel Gutiérrez:

- La moral y la lucha contra la corrupción sustituyen a los planteamientos políticos. De hecho la misma incursión en el 21 de enero tuvo un papel moralizador y mesiánico. Esta quizá es la mayor y al mismo tiempo más simple coincidencia que permitió la convergencia con los líderes indígenas y sociales. De la misma manera, la constitución del partido y la posterior participación en la campaña electoral se presentaron como una cruzada contra la corrupción convertida en la “última razón” y causa de todos los problemas del país (porque en la comprensión del coronel “él mismo” encarna lo bueno y la nueva moral pública del poder).
- Las fuerzas armadas, en su objetivo de construir el poder nacional, han constituido un puente entre los grupos de poder, la institucionalidad democrática y los diversos actores políticos y sociales. Lucio Gutiérrez, al igual que lo hicieron las dictaduras o la mayoría de militares que han participado en las contiendas políticas, cree expresar la superación de los antagonismos sociales y la expresión misma de la unidad nacional, por ello pretende sintetizar la superación de posiciones ideológicas o políticas: “No soy de izquierda ni de derecha, mi ideología es mi país”, repitió el Presidente en innumerables momentos. La conformación de su primer gabinete, antes que una posibilidad de concertar políticas de Estado y de gobierno entre sectores diversos, fue asumida por el Coronel desde una perspectiva administrativa y burocrática. Los objetivos de la patria son encarnados por el Presidente y su círculo: “Con Lucio y Napoleón avanza la nación”. La política pierde la dimensión del otro y por tanto del conflicto, se vuelve plana, en ella prevalecen los amigos de la

patria y el resto convertidos en enemigos políticos del Partido Sociedad Patriótica y por tanto del país.

- En esta perspectiva de la política no es posible reconocer distintos proyectos ni legítimos contradictores. La patria tiene amigos y enemigos a los que hay que servir o combatir. “El Ecuador quiere ser amigo incondicional de los Estados Unidos” expresaría el Presidente como corolario del cambio de su discurso nacionalista de la campaña electoral al pragmatismo y sumisión a los organismos multilaterales y a la política estadounidense en la región. Los enemigos, en cambio, están al interior del país y van creciendo, se extienden desde sus propios aliados a los partidos políticos que ejercen la oposición en el Congreso Nacional, los movimientos sociales que exigen el cumplimiento de los planteamientos programáticos, los periodistas y los medios de comunicación que en forma permanente “descontextualizan” sus declaraciones, todos van a engrosar la “lista de enemigos” del gobierno. La identificación del “líder” con la nación y por tanto con sus intereses, es propio de los regímenes autoritarios, característica que se evidencia, además, en los permanentes desafíos al Congreso Nacional, incluso antes de su misma posesión, en la utilización de la amenaza de una profunda reforma política para reorganizar el Estado, en la propuesta de Nueva Constitución, que entre otras cosas planteaba la posibilidad de que el ejecutivo dicte decretos-leyes y disuelva el Congreso Nacional. El ataque a sus enemigos y la defensa irrestricta de las Fuerzas Armadas no son más que el epílogo del carácter autoritario que entraña el régimen. Paradójicamente, la subordinación al PSC es la otra cara del mismo fenómeno, es el reconocimiento de los límites de la acción gubernamental, no derivado de los contrapesos constitucionales, sino de la constatación que los poderes oligárquicos han construido un andamiaje institucional débil y subordinado a intereses corporativos.

- Un elemento constitutivo de la actividad militar es el de orden proveniente de una estructuración jerárquica que, a su vez, es el resultado de una permanente competencia y disputa por lograr “las primeras antigüedades”. Esta regla que es básica en la construcción del mando y la disciplina, resulta perversa en el ejercicio del gobierno. El Presidente establece su propio círculo de subalternos, sus funcionarios pierden la capacidad de deliberación y si lo hacen, sus responsabilidades son menoscabadas, se establece un doble circuito: el frente político es suplantado por los familiares, el ámbito internacional es vigilado por el asesor de la presidencia encargado de temas internacionales, en el frente social se concentran los programas y proyectos en la oficina del Ministro, vaciando de funciones las subsecretarías o departamentos. Los funcionarios públicos de libre remoción no dependen de su inmediato superior sino de la autoridad del partido a quién deben la designación; los miembros del círculo vigilan a todos quienes no responden al mismo, la fidelidad reemplaza a la eficiencia y capacidad; la pérdida del principio de rendición de cuentas debilita la administración pública y a la propia institucionalidad democrática.

- El ejercicio del gobierno para el Presidente es el manejo de la impostura y sin saberlo coincide con Maquiavelo, el poder tie-

Gutiérrez es ante todo un militar: la patria tiene amigos y enemigos a los que hay que servir o combatir. "El Ecuador quiere ser amigo incondicional de los Estados Unidos" fue el corolario del cambio del discurso nacionalista al pragmatismo y la sumisión. La subordinación al PSC es la otra cara del mismo fenómeno.



ne su propia verdad. “No puede ni debe un príncipe prudente mantenerse fiel a su palabra cuando tal fidelidad redunde en perjuicio propio y han desaparecido las razones que motivaron su promesa...además, siempre se hallará argumentos para justificar la violación de su promesa”³. El Coronel no miente, gana tiempo, neutraliza y despliega un discurso para cada auditorio. Al FMI le asegura disciplina y control fiscal, mientras que a sus ex aliados les señalaba que es una táctica dilatoria; al Presidente del Congreso le plantea la posibilidad de un acuerdo mientras en el frente interno insiste en la vía de la consulta “que va porque va”; reparte picos y palas en las comunidades indígenas mientras con la CONAIE se compromete en una política de Estado para los pueblos indios, firma un acuerdo con los trabajadores petroleros mientras instruye al Ministro de Energía que inicie acciones legales contra los dirigentes, remite proyectos de ley al Congreso para luego retirarlos; reitera en la retórica de la no privatización en tanto oferta total apoyo a la inversión extranjera; sin embargo, de estas actuaciones que han ido mermando la credibilidad y confianza en la palabra del Presidente, el Coronel se distancia de Maquiavelo puesto que no miente, esto implicaría la existencia de un norte claro que sirve de referencia a la acción gubernamental y los erráticos comportamientos demuestran más bien un mandatario atrapado en su falta de consistencia y definiciones, en fin, cautivo de sus propias tácticas y de los pocos soportes que le mantienen en el poder.

3 Maquiavelo, Nicolás, 1995, *El Príncipe*, M.E. editores, Madrid, p. 122.

Escenarios de conflictividad y perspectivas

Cerca de cumplir un año en funciones, el gobierno del Coronel Lucio Gutiérrez enfrenta una profunda crisis. A diferencia de ocasiones anteriores, el deterioro acelerado del régimen en las últimas semanas se debe a la falta de capacidad para resolver temas coyunturales que han cuestionado la misma legitimidad del régimen, la credibilidad del Presidente y transparencia de su partido. Lo que, sumado a factores estructurales como la situación de inequidad de la sociedad ecuatoriana y las expectativas que el actual mandatario despertó en la población, configuran un escenario de conflictividad temprana, que podrían nuevamente en evidencia la profunda crisis de hegemonía que atraviesa la sociedad ecuatoriana.

En el escenario económico, lejos de los anuncios optimistas de reactivación, la situación aparece como difícil y complicada. Por un lado, la dolarización, casi cuatro años después de haber sido implementada, no ha cumplido con sus objetivos; además, hoy son notorias las presiones de diferentes grupos de poder empresariales y agro exportadores especialmente por salir de la dolarización, beneficiándose de este proceso al igual que lo hicieron cuando perdimos nuestro signo monetario. Si bien existen sectores como el financiero y el propio Fondo Monetario Internacional opuestos a la desdolarización, las presiones de los grupos oligárquicos podrían condicionar su apoyo político a cambio de esta medida.

A más de la debilidad de nuestra economía provocada por la dolarización, las presiones fiscales, la aprobación de un presupuesto desfinanciado -en el que no se han contemplado compromisos previamente establecidos y se han sobre valorado los ingresos-, así como las presiones del FMI para equilibrar las cuentas fiscales, pueden conducir al gobierno a la adopción de un nuevo ajuste que podría tener consecuencias dramáticas para la mayor parte de la

población y liquidar el débil respaldo que todavía posee el gobierno.

En el plano político, el régimen no ha logrado consolidar una mayoría parlamentaria, y tanto en los organismo de control como en el Tribunal Constitucional depende de su subordinación al Partido Social Cristiano y a eventuales acuerdos con el PRIAN. A esto debe sumarse la debilidad política provocada por el pésimo manejo internacional en el impasse con Colombia, la intransigencia e incondicionalidad en la defensa de las Fuerzas Armadas respecto de las denuncias de venta de armamento de forma ilegal y sobre todo la falta de un manejo político adecuado que permita enfrentar las denuncias de aportes ilegales en la campaña electoral. Estos hechos profundizan la debilidad del gobierno así como su aislamiento y dependencia tanto del PSC como de las FFAA.

La serie de expectativas generadas en diversos sectores y los compromisos establecidos antes y después de la elección con una serie de organizaciones, gobiernos seccionales y sectores políticos configuran una amplia gama de demandas que difícilmente el gobierno podrá cumplir. Existen todas las condiciones para la conformación de un frente rural que aglutine al movimiento indígena y a diversos sectores productivos tales como sectores bananeros, productores de papa, caficultores y ganaderos, que a más de verse afectados por nuestra rigidez monetaria y la vinculación indiscriminada al mercado internacional, miran con preocupación la decisión anunciada por el régimen de llegar a un acuerdo bilateral con los Estados Unidos a pesar de que tanto ese país como Canadá han ratificado su negativa a discutir la eliminación de subsidios a sus productos agrícolas.

De la misma forma, otros actores como los municipios y consejos provinciales han planteado su preocupación por la aprobación de un presupuesto claramente desfinanciado y que podría afectar, tal como en el presente año, la entrega de recursos de recursos y el cumpli-

miento de las obligaciones legales con los gobiernos seccionales. Estos planteamientos que se sustentan en expresas disposiciones constitucionales pueden coincidir con los objetivos de ciertos sectores políticos como el PRE que ven en la debilidad del gobierno la oportunidad de condicionar al régimen para establecer una nueva negociación que tenga como elemento central el retorno de Abdalá Bucaram. Y aunque esto pareciera ser imposible por la cercanía del PSC y el gobierno, no debería descartarse puesto que un eventual retorno afectaría mucho más al PRIAN que al PSC.

No debemos dejar de contemplar que el próximo año es electoral por lo que el gobierno tendrá más presiones de su propio partido y de otros sectores; las posibilidades de coincidencia parlamentaria decrecerán e incluso sus actuales aliados buscarán diferenciarse del gobierno.

Por último, un elemento que no podemos dejar de tomar en cuenta es el factor subjetivo que incentiva básicamente a la población indígena y campesina. Por un lado, la movilización de Bolivia que terminó con el gobierno de Sánchez de Lozada y, por otro, el “sentimiento de traición” que se desarrolla a partir de la ruptura ocurrida el 6 de Agosto del 2003.

Al parecer, el Gobierno del Coronel Lucio Gutiérrez le quedan pocas posibilidades de actuar con iniciativa propia para intentar el fortalecimiento institucional de su régimen. Con seguridad buscará dividir y cooptar al movimiento indígena o a un sector del mismo, establecer acercamientos con legisladores “independientes” pero su suerte parece estar en manos de los aseguramientos que le pueden brindar las Fuerzas Armadas y los cálculos políticos del PSC.

De igual forma, en los actores sociales hay un momento de reflexión relacionado no tanto con la posibilidad de la destitución, sino de la sinergia necesaria para replantear las condiciones mismas de la democracia y las posibilidades de sus supervivencia en un contexto marcado por el unilateralismo y la globalización.